

Intelectuales y comunicación política: las rearticulaciones defensivas del consenso neoliberal en el ocaso de la Convertibilidad.

Carlos Luis Freytes Frey.

Cita:

Carlos Luis Freytes Frey (2004). *Intelectuales y comunicación política: las rearticulaciones defensivas del consenso neoliberal en el ocaso de la Convertibilidad*. VI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-045/176>

Título: Intelectuales y comunicación política: las rearticulaciones defensivas del consenso neoliberal en el ocaso de la Convertibilidad.

Autor: Carlos Luis Freytes Frey

e-mail: monserrat@arnet.com.ar

Pertenencia institucional: Becario de Formación de Posgrado CONICET - Instituto de Investigaciones Gino Germani - UBA.

1. La esfera de la comunicación política

El objetivo de esta ponencia es analizar los procesos de lucha simbólica que se verificaron en la esfera mediática de la comunicación política durante el año 2001, en el contexto del agotamiento y crisis del régimen de Convertibilidad. En un contexto recesivo, las restricciones fiscales asociadas al mantenimiento de la Convertibilidad, y la profundización de las consecuencias sociales de las políticas de reestructuración económica implementadas durante los '90, en términos del crecimiento exponencial del desempleo y la pobreza, comportaron un creciente potencial de impugnación de ese paradigma de política. La hipótesis que organiza este trabajo¹ es que, en el terreno de los procesos de lucha simbólica que se verificaron durante el 2001 en la escena pública de los medios de comunicación masivos, la creciente impugnación de ese paradigma de política fue contestada por un proceso de rearticulación defensiva del consenso neoliberal que, hegemónico a lo largo de esa década, había sido decisivo para garantizar la viabilidad política de esas reformas. En este sentido, el trabajo se propone un doble objetivo: por un lado, formular algunas observaciones sobre la manera en que se verifican los proceso de lucha simbólica en la esfera de la comunicación política. Por otro lado, caracterizar las estrategias discursivas, las modalidades enunciativas, y el papel que desempeñaron los economistas expertos en esa rearticulación defensiva del consenso neoliberal, entendiendo que, no obstante la crisis terminal del régimen de

¹ Hipótesis sustentada en el análisis de la comunicación política de ese período.

Convertibilidad a fines de 2.001, ese análisis permite dar cuenta de contenidos y modalidades de intervención característicos del proceso de producción y reproducción de los recursos simbólicos que contribuyeron a sancionar la implementación de las políticas neoliberales durante la década pasada.

La elección de los discursos mediáticos como objeto de análisis se vincula con la importancia que, desde mediados de los años '80, y como consecuencia de la democratización del régimen político, asumieron los medios de comunicación masivos como espacio de lucha por la imposición de representaciones sobre el mundo social². La categoría de la comunicación política se refiere a aquel ámbito específico en el que se verifica la discusión de los asuntos públicos en la esfera de los medios de comunicación de masas, y define ese espacio social estructurado en el cual se intercambian los discursos de los actores que tienen o pretenden legitimidad para expresarse públicamente sobre la política (Wolton, 1.995)³. Es un ámbito de interacción de discursos contradictorios, portadores de pretensiones en competencia al reconocimiento de su autoridad simbólica (en tanto capacidad reconocida para imponer visiones del mundo social [Bourdieu, 1985: 66]); y cuya apuesta es el dominio de la interpretación política de la coyuntura.

El campo de la comunicación política se articula con el funcionamiento de las instituciones democráticas, en particular, con la cuestión del acceso de los elencos políticos profesionales a las posiciones de poder en el sistema político y el Estado. Bajo las condiciones de una autonomización creciente del campo político, la lucha política tiende a devenir en un

² En la Argentina, y replicando procesos de los países centrales, la constitución del campo de la comunicación política remite a las transformaciones de las formas de representación política, como consecuencia de la creciente fragmentación de las identidades sociales asociada a la modernización y los cambios en el mundo del trabajo; a la crisis de las formas partidarias tradicionales de agregación de intereses y constitución de identidades políticas; y al desarrollo de los medios de comunicación, por el cual estos se constituyen como una arena central de los procesos de lucha simbólica bajo los cuales se verifica la competencia política en las democracias contemporáneas (Manin, 1992; Landi, 1992; Cheresky, 1995; Vommaro, 2003).

³ En la definición restrictiva de Wolton, esos actores son los políticos, los periodistas, y la opinión pública a través de los sondeos, portadores cada uno de una legitimidad específica, asociada a la representación, la información y la comunicación respectivamente. En este trabajo, vamos a hacer un uso laxo de esta categoría, incluyendo a otros actores que intervienen en esa esfera, en particular, los economistas, que, como veremos, intervienen en función de una pretensión de legitimidad sancionada por una lógica de conocimiento. Por otra parte, la definición de Wolton es restrictiva en la medida en que excluye de su modelo a otros actores que, de acuerdo a nuestra observación, efectivamente intervienen en esa esfera: categorías específicas de intelectuales; organizaciones de interés; y expresiones de movilización directa de la sociedad civil.

aspecto decisivo una lucha por medios simbólicos, en la cual los elencos políticos pugnan por el acceso a las posiciones de poder estatal mediante la movilización electoral de una mayoría de ciudadanos alrededor de una representación común del mundo social (Champagne, 2001). En este sentido, el horizonte próximo de resolución del proceso polémico de producción de sentido que se desarrolla en la esfera de la comunicación política está dado por la realización de elecciones periódicas, instancia en la cual la expresión de la voluntad del *demos* mediante el sufragio (fundamento de la dominación política según las representaciones que sostienen la legitimidad del régimen democrático) sanciona las pretensiones en competencia de los elencos políticos por representar las demandas y preferencias de la sociedad, pretensión en la que fundan su legitimidad.

En la esfera de la comunicación política se verifica entonces un proceso específico de lucha simbólica que, articulado con las instituciones del régimen democrático, tiene eficacia social en la medida en que incide en la resolución de la competencia política, y -al menos en principio- en la definición de las políticas públicas, actuando sobre las representaciones que los agentes sociales tienen sobre el proceso político y lo que allí está en juego -cuestiones tales como cuáles son los problemas prioritarios de la hora, cuáles son las alternativas de solución de tales problemas factibles y legítimas, cuáles los elencos políticos en condiciones de traducir esas alternativas en decisiones efectivas del sistema político y la administración del Estado.

Los procesos de lucha simbólica que se verifican en la esfera de la comunicación política dependen también de las modalidades que caracterizan la producción de representaciones sobre el mundo social en la esfera de los medios de comunicación. En la producción cotidiana de noticias e informaciones, los medios de comunicación masivos reproducen y estabilizan un sentido de realidad, con valor de *actualidad*, para toda la sociedad⁴. Brevemente, y siguiendo

⁴ La reproducción de la dimensión simbólica de la vida social es un proceso global, que se verifica en la totalidad del tejido social a partir de una pluralidad de ámbitos de producción de sentido. Los actores sociales tienen además un acceso significativo inmediato al mundo social, a partir de las estructuras de sentido constituidas en los ámbitos de interacción de la vida cotidiana. Entre la dimensión holística aludida por el término cultura, y las experiencias significativas acuñadas en los ámbitos cotidianos del mundo de la vida, la esfera de los medios de comunicación se constituye como un ámbito específico de producción de representaciones sobre el mundo social. Los actores sociales se

las categorías propuestas por Luhmann (2.000), lo que caracteriza esa producción de la *actualidad* es la *clausura autorreferencial*, y la doble selectividad, *temática* y de los *esquemas de tratamiento*. La *selectividad temática* alude la delimitación de un registro temático común a los diversos soportes significantes que constituyen el sistema de medios, por el cual algo permanece en foco, en el centro de la atención, y todo lo demás es marginalizado como horizonte irrelevante para la comunicación pública. Este registro común es tematizado por cada medio mediante esquemas de tratamiento heterogéneos, pero polares y mutuamente referidos a nivel del sistema general. En este nivel de los tratamientos, cada medio estabiliza una red de *esquemas* o *topos*, que movilizan y fijan definiciones más amplias sobre la realidad social.

La organización de los procesos de lucha simbólica en la esfera de comunicación política replica esta modalidad de funcionamiento del sistema de medios. En cada coyuntura, la comunicación política recorta una agenda temática que va a ser colocada en el centro del debate público, con exclusión de todo lo demás, y en torno a la cual se organiza un campo de tomas de posición de una pluralidad de actores, como discursos contradictorios y mutuamente referidos, y cuya apuesta es la imposición de determinados esquemas de interpretación en el tratamiento de esa agenda. Es entonces en el nivel de los esquemas de tratamiento –que generalmente se reproducen, pero no se agotan, en las tomas de posición explícita de los periodistas y las organizaciones de medios- que cada medio *interviene* en los procesos de lucha por el sentido que se verifican en esfera de la comunicación política, acoplándose a las posiciones que definen ese espacio de disputa simbólica en cada coyuntura.

La *clausura autorreferencial* alude a que, para determinar aquello que constituye una "noticia", el sistema de medios no recurre a una "realidad exterior", sino a las estructuras de sentido acuñadas en la red recursiva de sus operaciones previas, que delimitan un horizonte de expectativas respecto a lo que tendrá valor de "información". Desde el punto de vista de

apropian de los discursos que circulan en esa esfera mediatizada en condiciones de recepción mediadas por las estructuras de sentido acuñadas en sus contextos particulares de interacción. No obstante, bajo las condiciones de mediatización de las sociedades contemporáneas, la experiencia de participar en un mundo social común, y los esquemas de interpretación que median el acceso a la esfera de los asuntos públicos, están indisolublemente entretejidas por las estructuras de sentido producidas y estabilizadas en esa esfera pública mediatizada.

nuestro análisis, la noción de clausura autorreferencial permite dar cuenta del *carácter sedimentado de las estructuras de sentido que organizan la comunicación política*: en cada coyuntura, las apuestas interpretativas con las que diversos actores intervienen en esa esfera no se verifican en un vacío discursivo, sino en un espacio estructurado por relaciones de sentido relativamente sedimentadas, que son el resultado estabilizado de la resolución transitoria de los procesos de lucha simbólica en un momento previo del funcionamiento del campo. Esas estructuras sedimentadas de sentido funcionan como un horizonte de inteligibilidad y pertinencia (esto es, recortan el ámbito de “lo decible”), y a la vez, como referencias simbólicas que constituyen un recurso para la producción de la legitimidad de las intervenciones que en el presente disputan por la interpretación de la coyuntura.

Para concluir esta presentación de algunas líneas que subyacen a nuestro análisis, hemos aludido, al comienzo de esta introducción a la constitución, en los ´90, de un consenso neoliberal, que, en su capacidad de hegemonizar la discusión política a lo largo de la década, habría sido decisivo en la producción de los recursos simbólicos que viabilizaron políticamente la implementación del proceso de reformas económicas durante los dos gobiernos de Menem, y su continuidad en el gobierno de la Alianza. El concepto de hegemonía formulado por Antonio Gramsci introduce un elemento de “liderazgo moral e intelectual” en el ejercicio de la dominación política por parte de una clase o actor social. En este sentido, supone un ejercicio “consentido” de la dominación política, fundado en la producción de un conjunto de valores y representaciones que son postulados como universalizables, y que, en la medida en que logran imponerse, definen un sentido de realidad y una orientación para la movilización de las energías políticas para la mayor parte de la sociedad. Entendemos que el concepto de hegemonía puede ser aplicado a la comprensión del proceso político argentino durante los ´90, en términos de la producción de un consenso en torno a la eficacia de las políticas neoliberales en el logro de la estabilidad. En efecto, a partir de la sanción del régimen de Convertibilidad, y

en contra de la memoria de la experiencia hiperinflacionaria de fines de los '80, el valor de la estabilidad devino el significante clave en referencia al cual se legitimaron cada una de las medidas de reforma económica. Colocado como horizonte universal de la práctica y el discurso político –en la medida en que parecía expresar un valor al que adhería el conjunto de la sociedad-, e interpretado en clave de la continuidad de las políticas neoliberales, el valor de la *estabilidad* fue decisivo en los sucesivos triunfos electorales del menemismo, y, en particular desde las elecciones presidenciales de 1995, definió los límites al interior de los cuales se formularon las propuestas de los principales actores del sistema político, lo que en los hechos contribuyó a la ratificación de esas políticas.

Por otra parte, como señala Williams (1980) el concepto de hegemonía no se refiere a un sistema estático y articulado de ideas, sino que se trata de un proceso histórico de producción de sentido, que “*debe ser continuamente renovado, recreado, defendido y modificado*” (Williams, 1980, pág. 134) para enfrentar otras prácticas significativas que lo impugnan. En lo que sigue, intentaremos dar cuenta de cómo se verificó ese proceso en la esfera mediática de la comunicación política durante el año 2001, y en el contexto de la crisis terminal del régimen de convertibilidad⁵.

2. La agonía del “modelo”: la discusión en torno al Déficit Cero en la prensa nacional.

Como propusimos en nuestra introducción, los procesos de lucha simbólica en la esfera de la comunicación política se verifican en el marco de estructuras de sentido relativamente sedimentadas, que son el resultado de la resolución transitoria de esa disputa en un momento previo del funcionamiento del campo. Dada la autorreferencialidad, y clausura relativa de ese

⁵ Este trabajo se basó en los diarios *Clarín* y *La Nación* de julio de 2001, durante el que se discutió la Ley de Déficit Cero. En ese período, consideramos los discursos de los actores del sistema político difundidos por ambos medios; las intervenciones de los economistas, en particular en el diario *La Nación*; y los análisis periodísticos y las editoriales. Como es evidente, esta selección no agota la esfera de la comunicación política. Sin embargo, creemos que ese recorte nos permite dar cuenta de los principales clivajes que organizaron la comunicación política durante el período. Nuestro análisis está centrado en *La Nación* dado que este diario, de una consistencia sorprendente en su línea editorial y periodística, e históricamente articulador de las perspectivas de los sectores dominantes de la Argentina (Sidicaro, 1993) operó de hecho como uno de los articuladores privilegiados del discurso neoliberal en ese período.

espacio de comunicación, esas estructuras de sentido son el resultado de la articulación discursiva de una serie de acontecimientos cuya relevancia para la discusión pública viene dada por su visibilidad en esa esfera mediatizada de comunicación.

A comienzos de la década de los ´90, el valor de la *estabilidad-Convertibilidad*, articulado contra la memoria hiperinflacionaria de fines de los ´80, se constituyó en el significante clave que contribuyó a sancionar la implementación de un programa de reformas neoliberales, y la legitimidad social y política del gobierno menemista. Frente a la experiencia de desarticulación social que había implicado la hiperinflación (Palermo y Novaro, 1996), la *estabilidad* se presentó como un horizonte universal de la práctica política, que pretendía expresar una aspiración del conjunto de la sociedad; pero a la vez, a partir del éxito antiinflacionario vinculado a la fijación de la paridad cambiaria por la Ley de Convertibilidad, ese horizonte universal se identificó con un contenido particular de política pública: la continuidad del programa de reformas neoliberales. El significante *estabilidad* aludía entonces de manera sintética a un paradigma de política que colocaba al mercado como principal organizador de las relaciones sociales; restringía la intervención del Estado en la economía; identificaba la acumulación privada de los sectores más concentrados como motor del desarrollo; y establecía límites precisos a los derechos sociales que era factible y legítimo reivindicar frente al Estado. Desde mediados del primer gobierno menemista, cada una de las políticas de reforma estructural se justificó en relación al valor de la estabilidad, y contra la amenaza de un retorno a la situación crítica de fines de los ´80.

En la medida en que la *estabilidad* se constituyó en la clave del consenso promedio que contribuyó a sancionar electoralmente las políticas de reforma, la oposición política al menemismo en la escena pública se concentró en las modalidades decisionistas de ejercicio del poder, y en el enriquecimiento ilícito de los artífices políticos del proceso de reforma. La oposición política al menemismo se articuló así en torno al par oposicional *corrupción vs. transparencia*, en una operación que tendía a asumir el valor de la *estabilidad*, y en

consecuencia, a colocar el paradigma de política económica que concurría a sancionar fue ra del debate político. La resolución de estas interpelaciones en competencia, sino a nivel del discurso público, a nivel de los comportamientos electorales que habilitaron la reelección de Menem en 1995, tuvo el resultado paradójico de dejar al poder político carente de otra legitimidad que no fuera el mantenimiento de la estabilidad -y estuvo en la base del creciente distanciamiento de la ciudadanía respecto del sistema político (Cheresky, 1995).

En la segunda mitad de los '90, la oposición política al menemismo comenzó a articularse en torno a las cada vez más evidentes consecuencias de las políticas de reforma, en términos de desempleo, distribución regresiva del ingreso, y deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población. La cuestión social emergente se articuló en torno a las demandas de *empleo* y *equidad*. El déficit de legitimidad entre ciudadanía y sistema político pareció comenzar a saldarse a partir de los triunfos electorales de la alianza electoral entre la U.C.R. y el Frepaso, coalición que hizo suyas las demandas de *transparencia* y *equidad* que habían estructurado la oposición al menemismo. No obstante, durante la campaña de 1.999, el discurso electoral de la Alianza ratificó la continuidad de los dispositivos institucionales básicos del modelo económico (la regla de la Convertibilidad), en una estrategia encaminada a vincular su propuesta con el valor de la *estabilidad* -cuya continuidad, de acuerdo a las formas de representación de la opinión pública proporcionadas por los sondeos era una demanda mayoritaria de la ciudadanía (Lorenc Valcarce, 2002).

La trayectoria posterior del gobierno de la Alianza en la esfera pública mediática puede ser descrita en términos de un progresivo proceso de desidentificación respecto a los significantes en referencia a los cuales había construido su legitimidad social y política, y su triunfo electoral. La desidentificación con la demanda de *equidad* se verificó a la par de los sucesivos ajustes fiscales con los que el gobierno procuró alinear las cuentas públicas con las restricciones de la Convertibilidad. En tanto que la desidentificación con la demanda de renovación de las prácticas políticas se verificó con el escándalo por los presuntos sobornos en

el Senado, la negativa del Ejecutivo a avanzar en la investigación de esas denuncias, y la posterior renuncia del vicepresidente Álvarez. Este proceso de desidentificación -vinculada tanto a las consecuencias de la política económica cuanto a las modalidades de manejo de cosa pública- contribuyó a alienar el consenso inicial en torno al nuevo gobierno, y fue articulado en la esfera de la comunicación política en términos de una *crisis de representación* del sistema político. En este contexto, el valor de la *estabilidad* se convirtió nuevamente en el exclusivo soporte simbólico del modelo económico y del sistema político.

En la coyuntura que analizamos, a mediados de 2001, la economía argentina, bajo las restricciones impuestas por la Convertibilidad, se encontraba en una recesión prolongada, que evidenciaba todos los rasgos que caracterizan el agotamiento de un régimen de cambio fijo: caída del nivel de actividad, vinculada a la pérdida de competitividad de la economía por la apreciación cambiaria; profundización de los desequilibrios del sector público, por el incremento del peso del endeudamiento externo en un contexto de deterioro de los ingresos fiscales; y pérdida de acceso a los mercados financieros internacionales, dado el deterioro de las cuentas públicas, y la incertidumbre en torno al mantenimiento de la paridad cambiaria⁶. No obstante la acumulación de indicadores negativos, la estrategia del gobierno de la Alianza consistió en intentar enfrentar esos desequilibrios manteniendo el esquema cambiario, y recurriendo a una serie de medidas de ingeniería financiera –el “blindaje” de fines de 2000; y el “megacanje” de títulos públicos en junio de 2001- para garantizar la continuidad del flujo de fondos necesario para atender los pagos de la deuda externa –decisión probablemente vinculada tanto a las dificultades objetivas para producir una devaluación en una economía fuertemente dolarizada, cuanto a la incertidumbre respecto a las consecuencias de esa medida para un gobierno que había hecho del mantenimiento del “1 a 1” unos de los ejes de su promesa electoral, y encontraba en él el soporte último de su deteriorada legitimidad social y política. Cuando a

⁶ En el caso de la Argentina, los desequilibrios se vieron agravados por la reversión de los flujos de financiamiento hacia los “mercados emergentes”, consecuencias de las crisis del Sudeste asiático y Rusia, y la devaluación de Brasil, a fines de los '90. Al mismo tiempo, las devaluaciones con las que estos países enfrentaron el cambio de condiciones internacionales profundizaron los problemas de competitividad de la economía argentina.

comienzos de 2.001 se insinuó un debate en torno a la paridad cambiaria, los articuladores del consenso neoliberal (economistas ortodoxos, y voceros de los mercados financieros internacionales) tomaron rápidamente partido por la dolarización, medida que, a la vez que congelaba los desequilibrios de la economía, implicaba en la práctica defender a cualquier costo la capacidad de pago externa de la Argentina, y garantizar la rentabilidad en divisas de las inversiones extranjeras en el país.

En este contexto, el anuncio de la Ley de Déficit Cero fue una iniciativa del entonces ministro Cavallo, con el apoyo irrestricto del presidente De la Rúa, con el objetivo de reestablecer el acceso del sector público a los mercados de capitales local e internacional, del que dependía tanto el financiamiento del déficit de las cuentas públicas, como la capacidad de pago de los servicios de la deuda externa. En su formulación, la medida hacía suyo el diagnóstico en clave neoliberal sobre las condiciones de resolución del estancamiento de la economía argentina⁷, que exigía: resolver el déficit fiscal, como condición para recuperar el acceso al crédito externo, lo que presuntamente impulsaría a la baja las tasas de interés locales, promoviendo un proceso expansivo por la recuperación de la inversión y el consumo. En la práctica, implicaba resolver la puja distributiva sobre los ingresos del Estado, privilegiando el pago de los servicios de la deuda, y descargando el costo de los desequilibrios sobre los demás gastos del sector público, en particular, los salarios y jubilaciones, que serían atendidos con los recursos disponibles luego del pago de la deuda⁸.

El tratamiento periodístico de la sanción del Déficit Cero se organizó en torno a dos series temporales: la evolución del índice de riesgo país, constituido en indicador de la “desconfianza” de los mercados financieros; y las tomas de posición y resoluciones de los ámbitos institucionales de decisión del sistema político, de los cuales dependía la ratificación o veto de la iniciativa oficial. La discusión de la iniciativa en la esfera mediática de la comunicación política enfrentó, dentro del campo político, al gobierno con los gobernadores de

⁷ E implicaba, por parte de Cavallo, abandonar las medidas “heterodoxas” (planes de competitividad; empalme cambiario) con las que había intentado promover el crecimiento en su regreso al ministerio de Economía.

⁸ Como consecuencia de la sanción del Déficit Cero, salarios y jubilaciones sufrirían un recorte del 13%.

la oposición justicialista y las autoridades partidarias y jefes parlamentarios de la coalición gobernante, de los cuales dependía la aplicación del ajuste fiscal en las provincias y la sanción parlamentaria de la iniciativa. El otro clivaje decisivo era al que enfrentaba a un conjunto heterogéneo de actores (periodistas, analistas de los mercados financieros y economistas) articuladores del diagnóstico neoliberal, con una "clase política" constituida desde el discurso de estos actores como un actor homogéneo. ¿Cuáles fueron entonces las estrategias discursivas desplegada por cada uno de estos actores en la discusión de la medida?

Desde el gobierno, la medida se presentó como una decisión "realista", impuesta por la fuerza de las cosas, y encaminada a preservar el valor de la estabilidad:

"Hay un solo camino para resolver nuestros problemas: gastar sólo lo que tenemos.

Cualquiera que diga que existe otra alternativa, miente. (...) La reducción del gasto es ineludible. (...) Tengan la absoluta seguridad que Argentina tiene esta única solución para retomar la senda del desarrollo económico y social. La alternativa sería el sufrimiento de todos. (...) Es necesario asumir la realidad y actuar en consecuencia". (De la Rúa, discurso de lanzamiento del Déficit Cero, 12/7/01)

"Es ineludible dar este paso que ha anunciado el Presidente de la Nación (...). Tenemos que respetar a rajatabla los compromisos. Solo así aseguraremos también (...) la estabilidad de nuestra moneda, que debe quedar muy en claro que no están puestas en duda. Si algo ha cambiado en la Argentina es que no habrá devaluaciones (...) porque defenderemos a rajatabla la estabilidad de la moneda. (...) Eso debe quedar muy en claro. Y a eso apuntan esas medidas". (Cavallo, discurso de lanzamiento del Déficit Cero, 12/7/01)

Los diarios identificados con el paradigma neoliberal (*La Nación* y *Ámbito Financiero*) asumieron inmediatamente la apelación al "realismo" de las medidas:

[T] “Adecuar el gasto a la realidad”. (Editorial de La Nación, 11/7/01)

“Cuando los gobernantes ignoran, con necedad, los datos de la realidad económica, los países suelen ser llevados al borde del abismo”. (Editorial de La Nación, 15/7/01)

invocando las consecuencias catastróficas que sobrevendrían de una eventual demora en la implementación de una decisión dictada por una estricta racionalidad técnica:

[T] "Ultima jugada fuerte y audaz antes del caos" (Ámbito Financiero, 12/07/2001).

"El país en la antesala de la crisis": "Los argentinos de esta generación estamos en la antesala de una crisis de tales proporciones que, si al fin llega, nunca olvidaremos (...)

Estamos a tiempo de evitarla, aunque el plazo se acorta peligrosamente" (LN, columna de opinión de Mariano Grondona, 8/07/2001).

La necesidad e inevitabilidad del ajuste se justificó entonces por referencia a una racionalidad eminentemente técnica sustentada por el saber económico, a través de la cual pretendía expresarse una necesidad del orden de las cosas⁹. Esa racionalidad económica se presentaba articulada al polo de la *estabilidad-Convertibilidad*, en referencia al par oposicional *estabilidad* (con el desplazamiento metonímico *ajuste*) o *caos*. En la producción del carácter necesario y estrictamente racional del ajuste cumplieron un papel decisivo las intervenciones de los economistas expertos, a través de voz de los operadores de los mercados financieros y en una serie de columnas de opinión reproducidas en La Nación.

Una serie de trabajos recientes han focalizado la atención en el papel que desempeñaron estos economistas expertos tanto en la formulación del diagnóstico que sancionó la implementación del proceso de reformas estructurales a principios de los '90 (Beltrán, 2004), como en la gestión efectiva de las políticas de reforma, y en la producción, en la esfera pública, de "*los alegatos de política pública*" que contribuyeron a la formación de un consenso en torno a la necesidad de esas reformas (Camou, 1997: 66). En una posición de "autonomía relativa"

⁹ La Nación titulaba en tapa su columna de análisis de la medida: "*Es un problema matemático, no ideológico*". (12/07/2001)

respecto al Estado, en función de su organización en redes semi-privadas de expertise (fundaciones, centros de investigación, tanques de pensamiento y consultoras especializadas), estos economistas, formados en su mayoría en universidades extranjeras en el paradigma neoclásico dominante de la disciplina, *"inciden sobre las políticas económicas a fin de disciplinar a los agentes económicos y al propio Estado, de acuerdo con patrones de análisis y evaluación derivados de modelos y teorías económicas"* (Camou, 1997: 65).

Lo que caracteriza la intervención de estos economistas expertos en la esfera pública es la pretensión de expresar, no una posición ideológica o un interés particularista, sino una racionalidad eminentemente técnica, fundada en el dominio científico de la disciplina. Desde la perspectiva de Robert Reich (1993) la condición de experto define un tipo específico de trabajo intelectual, el de los "analistas simbólicos", que en las sociedades contemporáneas caracteriza a todos aquellos agentes sociales portadores de un saber técnico específico, especializados en la identificación y resolución de problemas mediante la manipulación de símbolos. Mientras que la figura del intelectual clásico interviene en el debate público proponiendo una hermenéutica del mundo social que, en la medida en que está sancionada por la discusión inmanente a un campo de producción cultural relativamente autónomo¹⁰, aspira a establecer una relación comunicativa con un público de legos, los intelectuales expertos intervienen en función de un saber dogmático asegurado por el dominio técnico de un campo específico de actividad, que reclama reconocimiento.

Las intervenciones de estos economistas concurren entonces a ratificar el diagnóstico que fundamentaba la medida; a establecer la necesidad del recorte salarial, en función de un diagnóstico restrictivo que identificaba en el exceso de gasto del sector público el origen de la crisis; y a reclamar de los actores del sistema político el apoyo a una iniciativa que constituía la única alternativa efectiva frente a la coyuntura:

[T] "Déficit Cero: la última oportunidad": "El sector público, que ha venido gastando sistemáticamente por encima de los ingresos que ha recaudado, (...) no puede seguir

¹⁰ En este sentido, Bourdieu (2000)..

funcionando de esa manera (...). Las medidas adoptadas por el Gobierno (...) están entonces en la dirección correcta. (...) Es esta la última oportunidad para que el presidente intente torcer el rumbo de los acontecimientos. Si se malogra la puesta en marcha del déficit cero (...) la crisis no dejaría de agudizarse" (LN, columna de opinión de Miguel Angel Broda, economista, consultor privado, presidente de la Fundación Gobierno y Sociedad, 15/07/01).

"El déficit cero es aceptado por la necesidad de evitar la cesación de pagos, de consecuencias desastrosas para la sociedad y la economía argentinas. (...) Ningún sacrificio es mucho para lograr esos objetivos, porque marcan el camino del círculo virtuoso de la economía, saliendo del actual circuito vicioso del déficit". (LN, columna de opinión de Roberto Alemann, economista, ex ministro de Economía, 18/7/01)

"No había otra alternativa que pudiera evitar el descontrol de las variables económicas, con las tremendas consecuencias sociales y políticas que no son difíciles de predecir. (...) La aritmética del sistema determinaba, además, que se debía actuar indefectiblemente sobre salarios y jubilaciones" (LN, columna de opinión de Manuel Solanet, economista, miembro del Concejo Académico de FIEL).

[T] "La unidad para enfrentar la crisis": "El país está virtualmente en quiebra, devorado por la insaciable voracidad del gasto público. (...) La dirigencia política, en especial la que constituye el oficialismo, tiene en esta hora decisiva la responsabilidad de encolumnarse detrás del presidente de la Nación para apoyar el anunciado ajuste del gasto público (...) Buscar alternativas es teóricamente encomiable, pero la insobornable realidad indica que si no tomamos el toro del desequilibrio fiscal por las astas, la Argentina se hundirá en el

incierto mar del default". (LN, columna de opinión de Javier Timerman, director ejecutivo del departamento de divisas de Bears Stearns, 22/7/01)

Las tomas de posición pública de los economistas a la vez concurrieron a definir y ratificaron los esquemas de tratamiento propuestos por los actores del campo periodístico identificados con la reproducción del consenso neoliberal, en particular La Nación, tanto respecto a las causas de la crisis:

"Los distintos sectores políticos deben aceptar la adecuación del gasto público a la realidad de un país que no crece desde hace tres años. (...) No habrá reactivación económica posible con los actuales niveles de las tasas de interés. Y las tasas no bajarán en la medida en que el Estado nacional y las provincias sigan requiriendo cada vez más fondos para paliar sus abultados déficit". (Editorial LN, 11/7/01)

como a la estricta racionalidad de las medidas dispuestas para enfrentarla:

[T] "La hora de la responsabilidad": "Quienes se oponen a la política instrumentada por el Poder Ejecutivo (...) no han ofrecido hasta ahora caminos convincentes o viables. Se han limitado a desplegar invocaciones retóricas (...). Sería lamentable que por efecto de esas posiciones puramente emocionales, carentes de racionalidad, se pusiera en peligro el desenvolvimiento de la política de déficit cero diseñada por el gobierno nacional. (...) El compromiso del gobierno nacional no es, en este momento, una consigna de un gobierno determinado: **es un imperativo de la razón** ante el cual ningún argentino (...) puede permanecer indiferente". (Editorial LN, 19/7/01)

La apelación al carácter necesario y racional del déficit cero se encaminaba así a desactivar la oposición de los actores del sistema político, y a definir los límites dentro de los cuales estos deberían desempeñarse: sancionar el ajuste fiscal. Y en efecto, la oposición a las medidas provino de los actores del sistema político con capacidad para vetar el tránsito legislativo de la

norma del Ejecutivo: los gobernadores justicialistas, y los jefes partidarios de la U.C.R. y el Frepaso. El rechazo de los actores del campo político señalaba que la norma hacía recaer el peso del ajuste fiscal sobre los sectores más desprotegidos (salarios público y jubilaciones), reclamando un esfuerzo *equitativo* que alcanzaran a los sectores económicos beneficiados durante los años '90 (las empresas de servicios públicos privatizados y los bancos)¹¹ -y, probablemente, se fundaba en el cálculo estratégico de que un deterioro adicional del lazo de representación por la profundización de costos sociales de la política económica amenazaba su propia reproducción política.

Frente a lo cual, la respuesta de los articuladores del consenso neoliberal consistió en *desplazar la crisis del terreno económico al terreno político*. Por un lado, las evoluciones del riesgo país, convertidas en indicador ominoso de la inminencia de la catástrofe, se vincularon explícitamente con *la demora* de los actores del sistema político a aprobar la medida¹²:

"Es importante que los hombres del Gobierno y del sector político sepan que no tienen por delante todo el tiempo del mundo. Deben formalizar sus acuerdos con celeridad (...)

No queda más espacio para idealizar o falsear la realidad. Los hechos son tercos: están ahí, nos condicionan. Es imprescindible reconocerlos, aceptarlos, y obrar en consecuencia (...) La dirigencia política y gremial no debe cometer otra vez el error de entorpecer o dilatar la marcha hacia la meta que determina e impone la realidad".

(Editorial LN, 19/7/01)

La crisis que enfrentaba la Argentina no reconocía sólo causas económicas, sino políticas, vinculadas a las dificultades del presidente De la Rúa para garantizar la *governabilidad* –esto es, los ajustes necesarios para garantizar el pago de los compromisos externos:

¹¹ En particular, tal fue el caso del titular de la U.C.R., Raúl Alfonsín, convertido inmediatamente en blanco de las críticas de medios y periodistas identificados con la necesidad del ajuste. Ver La Nación, domingo 15/07, tapa: *El ajuste a los jubilados demora el acuerdo del gobierno y la Alianza*; y columna de opinión de Mariano Grondona en la misma edición: *Nuestra duda tiene un nombre: Raúl Alfonsín*.

¹² Esta vinculación caracterizó los titulares del período: "*Se derrumbaron todas las cotizaciones. Los inversores descreen de la capacidad del Gobierno para llegar al déficit cero*" (LN, 13/7); "*El mercado espera definiciones políticas*" (LN, 16/7); "*Mercados, al ritmo de las negociaciones políticas*" (LN, 17/7). En el mismo sentido, la serie de titulares de *Ámbito Financiero* sobre el tránsito final de la Ley en el Senado: *Mercados susceptibles ante demoras políticas* (20/07); *Preocupante: complica el Senado la ley al Gobierno* (25/07); *Muy lento el Senado: pasó la ley de ajuste al martes* (26/07); *Mala jornada financiera por las demoras políticas* (27/07).

[T] "No todo pasa por la economía": "El poder está fragmentado y se ve un gobierno débil que no termina de decidir que camino quiere seguir (...) Hoy resulta imposible explicar la recesión sólo por causas económicas". (LN, columna de R. Cachanosky, 06/7/01)

[T] "De la crisis económica se sale superando la crisis política": "(...) A partir del segundo trimestre [de 2000] la crisis política y la pérdida de credibilidad de la coalición gobernante tuvieron en jaque la confianza en el futuro del país, y por ende, a la economía. (...) El problema por superar es la falta de credibilidad en el Gobierno. Por ello, para evitar una crisis institucional, económica y social, los políticos de la Alianza deben hacer una fuerte demostración de apoyo al Gobierno ". (LN, 15/07/01, columna de opinión Aldo M. Abran, economista, consultor)

En segundo lugar, las resistencias de gobernadores y legisladores a sancionar la norma en los términos planteados por el gobierno fueron interpretadas en términos de la voluntad de esos actores de preservar beneficios particularistas. En un desplazamiento de los significantes que organizaban la comunicación política, La Nación vinculó la sanción del Déficit Cero con las condiciones de resolución de la *crisis de representación*: mientras que la oposición a la norma expresaba la defensa de privilegios corporativos por parte de los actores del campo político, el ajuste fiscal debía perfeccionarse sobre aquellas estructuras que constituían un ámbito de obtención de prebendas y beneficios privados de *la clase política*, y como un capítulo de una *reforma institucional* –el tópico periodístico era *la reforma política*- tendiente a resolver la crisis de representación que, de memoria reciente por los hechos del Senado, y asociada a la *corrupción* de los elencos políticos, era puesta en escena por las encuestas de opinión. Entre una extensa lista de ejemplos¹³:

¹³ Durante el período, los editoriales de La Nación volvieron recurrentemente sobre esta línea argumentativa. Ver: "*La calidad del gasto público*" (9/7); "*Adecuar el gasto a la realidad*", (11/7/01); "*La Justicia y el dispendio de fondos*" (27/7)

[T] "El mensaje de la ciudadanía cordobesa": "[El voto favorable del electorado cordobés en el plebiscito convocado por el gobierno provincial para eliminar el Senado, y reducir el número de legisladores] es un indicador elocuente del grado de respaldo popular que tienen en la actualidad los intentos por achicar el gasto público –en particular el costo de la actividad política- y por transparentar su funcionamiento. (...) Lamentablemente, gran parte de la clase política no parece percibir esta demanda ciudadana, y hace todo lo posible para conservar viejas prebendas y privilegios que no tienen razón de existir. (...) Debe celebrarse que la ciudadanía cordobesa haya puesto de manifiesto un apoyo al ajuste del sector público que confirma una fuerte demanda de toda la sociedad argentina. (...) Este [mensaje] tendría que verse reflejado ahora en decisiones políticas que consoliden la propuesta del déficit fiscal cero, poniendo más el acento en la reducción del gasto público, y específicamente en el costo de la actividad política". (LN, editorial, 24/7/01)

[T] "El modelo en agonía es el del despilfarro": "El principal argumento de quienes convocaron al paro es que `el modelo está terminado´. Tienen razón (...) En 2001 ha llegado a la situación terminal el modelo prebendario que se financia tomando deuda. (...) Esas mismas personas saben que en el Estado hay gente que cobra y no trabaja, que los fondos públicos se pierden por sinuosos caminos donde la ineficiencia es tal que hace más que razonable las sospechas de que hay corrupción. (...) La clase dirigente está dividida entre quienes quieren limpiar el Estado de clientelismo, y quiénes se niegan a hacerlo". (LN, tapa, columna de J. Oviedo, 21/7/01)

[T] "Por no ajustarse, los políticos ponen al país frente al abismo". (LN, columna de R. Cachanosky, 21/7/01)

[T] "Déficit Cero: el problema es el gasto": "La realidad es que, escudándose en un discurso progresista y anticapitalista, más de un dirigente político hoy está luchando a brazo partido por tratar de preservar los ingresos que necesita para mantener su empresa política. Siendo que los políticos son profesionales de esta actividad, lo que están haciendo es defender su negocio, que requiere de los gastos necesarios para mantener sus aparatos políticos y sus ingresos". (LN, columna de R. Cachanosky, 29/7/01)

A fin de caracterizar la especificidad de la toma de posición de La Nación, y a la vez, dar cuenta de cómo determinados esquemas de sentido informan la totalidad del campo de la comunicación política, vamos a hacer una referencia al diario Clarín. El tratamiento de *Clarín* se inscribió en la línea editorial desarrollada por el diario a lo largo del período, que cifraba en *la recomposición del poder político* las expectativas de resolución de la crisis¹⁴. Respecto al programa de ajuste fiscal, reiterando una posición habitual del medio, la línea editorial planteó la necesidad de atender, junto a las expectativas de los mercados financieros, las condiciones para recuperar el crecimiento de la economía. No obstante, en la medida que el diario hizo suyo el diagnóstico respecto a la inevitabilidad y necesidad del ajuste -en un indicador de la eficacia simbólica del discurso de los expertos-, la línea editorial del diario formuló una constante una apelación al "logro de consensos" entre los actores del sistema político, lo que en la coyuntura implicaba acordar la sanción del Déficit Cero:

[T] "La necesidad de forjar consensos": "El ajuste fiscal es inevitable, debido a que el Estado ya no tiene capacidad de financiarse en el exterior ni en el mercado financiero interno, y no tiene, por lo tanto, capacidad de gastar por encima de lo que percibe. (...) El hecho de que un ajuste sea necesario no permite esperar que sea bien recibido por

¹⁴ En función de esto, en el tratamiento de las negociaciones en el campo político, contra la impugnación desplegada por los articuladores del consenso neoliberal, el diario otorgó un amplio espacio a las modificaciones introducidas para moderar el impacto del ajuste (con la suba del piso mínimo a partir del cual se recortarían salarios y jubilaciones), y distribuir los costos del recorte de las cuentas públicas (postergación de la eliminación de impuestos, restitución de los aportes patronales a las empresas de servicios públicos).

quienes deberán cargar con el mayor costo del mismo. (...) En tales circunstancias, es evidente que la búsqueda de consensos es particularmente difícil. Pero la profundidad de la crisis económica e institucional que atraviesa el país lo hace indispensable". (Clarín, editorial, 13/7/01)

[T] "La crisis exige llegar al consenso": "A nadie escapa que el país atraviesa una situación crítica que puede agravarse si el Gobierno, el oficialismo y la oposición no llegan a un sólido acuerdo para enfrentarla. La búsqueda de consensos para superar la crisis no es ya un reclamo de inversores externos u operadores financieros, sino, seguramente, de la gran mayoría de la población. (...) La situación no ofrece, ahora, opciones. (...) Si no hay un acuerdo convincente, la crisis actual se profundizará con costos seguramente elevados, y quienes hoy exhiben rigidez o intenciones de lucrar políticamente con posiciones principistas deberán responder ante la opinión pública por las consecuencias de sus actitudes" (Clarín, editorial, 16/7/01).

Como es sabido, el gobierno obtuvo finalmente la sanción legislativa del Déficit Cero, lo que postergaría por unos meses la ruptura definitiva de la Convertibilidad. El apoyo reticente y escéptico de los legisladores de la debilitada coalición oficial, y la decisión de la oposición justicialista de facilitar el tratamiento de la norma¹⁵, fue presentada por estos actores como un aporte a la *governabilidad*, y como una decisión encaminada a preservar la *estabilidad* frente a las consecuencias catastróficas que sobrevendrían de un incumplimiento de los compromisos externos -en lo que constituye un indicador de la eficacia simbólica de la comunicación política, y en particular de los articuladores del consenso neoliberal, para imponer en la coyuntura los esquemas de inteligibilidad de las decisiones de los actores del campo político.

3. Conclusiones

¹⁵ En el debate parlamentario en ambas Cámaras, la mayoría de los discursos fueron *en contra* de la norma sancionada. Ver Clarín, 21/7: [T] *Los diputados cuestionaron el recorte desde lo ideológico*; 30/7: [T] *Un debate largo, cargado de tensión, y con muchas críticas*.

Nuestro análisis de la discusión de la Ley de Déficit Cero en la escena pública mediática, centrado en el diario La Nación, intenta dar cuenta de ciertas formas de organización de la comunicación política, en un contexto que hemos caracterizado como de rearticulación defensiva del consenso neoliberal frente al agotamiento de la Convertibilidad.

El diario La Nación es un actor específico del campo periodístico, campo que incluye a la totalidad de las organizaciones de medios. La construcción de la realidad en la escena mediática es un resultado de la comunicación que se verifica en la totalidad de ese espacio más amplio. Esa comunicación, como producción cotidiana de noticias e informaciones, y como puesta en circulación de los discursos de una pluralidad de actores exteriores al sistema de medios, contribuye a estabilizar una serie de *esquemas y topos argumentativos*, que informan la totalidad de esa esfera de comunicación, y permanecen disponibles para la construcción de la actualidad que realiza cada medio. En particular para el período bajo análisis, dos de tales esquemas centrales en la tematización de la actualidad política -acuñados sintéticamente bajo la forma de significantes claves- eran, por un lado, el valor de la *estabilidad* (que, como dijimos, aunque debilitado por las consecuencias del modelo económico en términos de desempleo y exclusión crecientes, continuaba no obstante organizando la discusión política en la esfera pública mediática) y, por otro lado, la constatación de una *crisis de representación del sistema político* significativa que aludía a la creciente pérdida de legitimidad de los actores del sistema político, consecuencia tanto del rechazo a un estilo de particularista de práctica política; *cuanto* al abandono de la promesa electoral por parte del gobierno de la Alianza, y a la ineficacia de las políticas públicas para revertir el deterioro creciente de las condiciones de vida de la mayoría de la población.

En la medida en que ningún actor está en condiciones de controlar la totalidad de la comunicación política, las apuestas interpretativas de cada medio -y, podemos hipotetizar, de cada enunciador que accede a esa esfera-, como forma de intervención en los procesos de

lucha simbólica que allí se verifican, dependen menos de un proceso de exclusión temática, que de un trabajo de apropiación y desplazamiento de los *esquemas* y *topos* que organizan esa esfera como una arena semánticamente estructurada. Como vimos, el tratamiento de la Ley de Déficit Cero en *La Nación* buscó articular la iniciativa con la preservación de la estabilidad y la paridad cambiaria, valor devenido en el soporte último de la legitimidad del modelo neoliberal; a la vez que, mediante una interpretación restrictiva de la *crisis de representación*, como demanda exclusiva de renovación institucional y racionalización de las estructuras políticas compatible con el ajuste fiscal, buscó impugnar la legitimidad de aquellas instancias institucionales del sistema político que rechazaban la iniciativa desde una consideración de los costos sociales de la restricción fiscal.

Es en este sentido que las apuestas interpretativas que organizaron la tematización de la Ley de Déficit Cero en los diarios analizados puede ser caracterizadas como un proceso de rearticulación defensiva y de desplazamiento de los significantes claves que organizaban la comunicación política en esa coyuntura específica. Desplazamiento, en la medida en que la insistencia en la necesidad de subordinar las decisiones de los actores del campo político a las exigencias de una pretendida racionalidad técnica que expresaba las expectativas de los mercados financieros internacionales, en tanto alentaba la clausura del sistema político respecto a las demandas de una sociedad crecientemente afectada por el desempleo y la exclusión, contribuía a alimentar el mismo proceso de desafección por el que la legitimidad de los actores del sistema político era impugnada en términos de una crisis de representación.

En segundo lugar, hemos señalado el papel que desempeñaron los economistas expertos en la fundamentación del carácter racional y estrictamente técnico del ajuste fiscal exigido para la continuidad del modelo neoliberal. Es en función de esa racionalidad técnica, legitimada por referencia a la pretendida científicidad del paradigma dominante de la disciplina económica, que los articuladores del consenso neoliberal buscaron imponer la subordinación de las decisiones de los actores del sistema político a las exigencias del modelo económico. La

referencia a una racionalidad técnica implica sustraer las decisiones de política económica a la posible formulación de una voluntad democrática, lo que constituye a su vez un rasgo necesario de las políticas neoliberales, en la medida que su implementación implica el deterioro de las condiciones de vida de sectores mayoritarios de la población. En este sentido, neoliberalismo y racionalidad tecnocrática guardan entre sí una profunda afinidad, y son ambos contradictorios con la formulación de una voluntad política autónoma al interior de las instituciones del régimen democrático. Mientras que las referencias a la racionalidad económica fueron decisivas en la producción de los recursos simbólicos que contribuyeron a sancionar las políticas neoliberales, la continuidad de esas políticas a lo largo de los '90 permiten explicar aspectos decisivos del proceso político de la Argentina reciente, en particular, la pérdida de legitimidad de los actores del sistema político, y la ruptura creciente entre sociedad civil y sistema político, cuya expresión más visible fueron las masivas movilizaciones que acompañaron el quiebre definitivo de la Convertibilidad en diciembre de 2001.

Bibliografía referida:

- Beltrán, Gastón (2004): *Los intelectuales liberales. Poder tradicional y poder pragmático en la Argentina reciente*, Buenos Aires, mimeo.
- Bourdieu, Pierre (1985): "Lenguaje y poder simbólico", en *Qué significa hablar*, Madrid: Akal.
- Bourdieu, Pierre (2000): *Intelectuales, política y poder*, Buenos Aires: Eudeba.
- Camou, Antonio (1997): "Los consejeros del príncipe. Saber técnico y política en los procesos de reforma económica en América Latina", *Revista Nueva Sociedad* Nro. 152 nov-dic, Caracas: Nueva Sociedad.
- Champagne, Patrick (2001): *Faire l'opinion. Le nouveau jeu politique*, Paris, Minuit.
- Landi, Oscar (1992): "La política en las culturas de la imagen", en *Devórame otra vez*, Buenos Aires: Planeta.

- Lorenc Valcarce, Federico (2002): "Agenda política, producción de sentido y conflictos sociales en la Argentina. El último año del gobierno de Menem", en Levy, Bettina (comp.): *Crisis y conflicto en el capitalismo latinoamericano: lecturas políticas*, Buenos Aires, CLACSO.
- Manin, Bernard (1992): "La metamorfosis de la representación", en Dos Santos, Mario (coord.), *¿Qué queda de la representación política?*, Caracas: Nueva Sociedad.
- Wolton, Dominique (1995): "La comunicación política: construcción de un modelo", en Ferry, Jean-Marc, Wolton, Dominique, et al., *El nuevo espacio público*, Barcelona: Gedisa.
- Luhmann, Niklas (2000): *La realidad de los medios de masas*, Barcelona/México D.F.: Anthropos/Universidad Iberoamericana.
- Vommaro, Gabriel (2003): "Lo que quiere la gente". Los sondeos de opinión pública como herramienta política. El caso de las elecciones nacionales de 1999", en Cheresky, Isidoro y Blanquer, Jean-Michel (comps.): *De la ilusión reformista al descontento ciudadano. Las elecciones en Argentina 1999-2001*, Rosario: Instituto de Investigaciones Gino Germani - Instituto des Hautes Études de L'Amérique Latine - Homo Sapiens, 2003.
- Williams, Raymond (1980): *Marxismo y literatura*, Barcelona: Península.
- Reich, Robert (1993): "Los analistas simbólicos", en *El trabajo de las naciones. Hacia el capitalismo del siglo XXI*, Buenos Aires: Vergara.

Fuentes:

Diarios *Clarín* y *La Nación*, julio de 2001.